

Presentan: UPPN & RIDH
De cara al 74º período de sesiones



DETENIDOS, TORTURADOS Y DESPLAZADOS EL PRESIDIO POLÍTICO Y SUS SECUELAS EN NICARAGUA

Informe acerca de la tortura y el trato inhumano, cruel y degradante de personas privadas de libertad en condición de detención política en Nicaragua y la permanencia de la violencia de Estado en sus vidas poscarcelarias.

Informe dirigido y elaborado para el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura (CAT); con base en entrevistas a personas víctimas de tortura con ocasión de su detención arbitraria y su detención en los lugares de reclusión en Nicaragua, personas que fueron detenidas como consecuencia de la represión desatada por parte del Estado frente a las manifestaciones.

RESUMEN

En este informe denunciaremos las múltiples violaciones que han sufrido personas privadas de libertad en condición de presidio político en Nicaragua en contra del marco de la Convención Contra la Tortura. Esta investigación exhaustiva está basada principalmente en entrevistas realizadas a las treinta víctimas cuyos casos están aquí incorporados, y que está complementada por la investigación documental de sus casos. En la primera parte del informe elaboramos con base en estos testimonios las múltiples maneras por las que estas personas fueron violentadas. Debido a la persistencia de acciones violentas en su contra posterior a su excarcelación, la segunda parte del informe se basa en entrevistas de seguimiento con 21 de estas víctimas, sistematizando así las secuelas de su presidio, las formas en que el Estado y sus operarios siguen violentando sus derechos fundamentales y el desplazamiento forzado que esto ha causado. De esta manera argumentamos cómo el Estado de Nicaragua comete actos de tortura, obstaculiza el proceso de su debida documentación e investigación y busca callar a las personas víctimas de estos actos a través del asedio, la amenaza y la negación de sus derechos humanos y civiles básicos.

Mediante la presente denuncia solicitamos al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas para que en el marco del examen realizado al Estado de Nicaragua como Estado parte de la Convención, a que el Comité haga un llamado y condene estos actos de tortura sistemáticos que pueden constituir delitos de lesa humanidad debido a su sistematicidad y brutalidad, y a que inste al Estado de manera urgente a tomar medidas que pongan fin a esta situación sistemática de violaciones de derechos humanos, abriendo investigaciones/procedimientos judiciales a los funcionarios estatales y operarios paraestatales que las cometen.

Esta denuncia incluye una petición de libertad para todos los presos políticos que se han manifestado en contra del gobierno, petición que solicitamos, el Comité apoye en su declaración una vez finalizado el examen y presente a los representantes del Estado en el diálogo durante el examen. Instamos al Comité Contra la Tortura a solicitar al gobierno de Nicaragua a aceptar una pronta visita oficial del Comité que se concrete de manera oficial por invitación formal por parte del Estado.

INTRODUCCIÓN

El presente informe difiere del formato común, debido al tipo de investigación realizada y a la situación de peligro en la que se encuentran las treinta víctimas presentadas, quienes se autodenominan excarcelados políticos. Esta auto denominación de (ex) presos o excarcelados *políticos* se debe a que fue considerado injusto su encarcelamiento ya que fue producto de la defensa de sus derechos durante y posterior a las protestas iniciadas en abril 2018, frente a las políticas represivas del Estado de Nicaragua y su Gobierno.¹ Sus detenciones, que en su mayoría recibieron atención mediática y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, fueron arbitrarias, al margen del estado de derecho y en inobservancia de las garantías del debido proceso.

Desde el inicio de las protestas en abril del 2018 en contra del gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega, más de mil seiscientos personas fueron detenidas y más de ochocientos de ellas han sido juzgadas y condenadas a prisión por jueces parcializados a favor del gobierno de turno.² Las condenas fueron por presuntos delitos comunes, tales como robo, narcotráfico, porte o tenencia ilegal de armas, tanto como crímenes extraordinarios que previo a abril 2018 no estaban tipificados como delitos en el Código Penal, como terrorismo. En su momento, la mayoría de las personas presas políticas (incluidas varias de las víctimas aquí) fueron excarcelados bajo la controversial Ley de Amnistía promulgada el 8 de junio del 2019. A la vez esta ley permitió que se exculparan los autores de graves violaciones de derechos humanos, específicamente actores estatales y paraestatales involucrados en la represión letal de las protestas y cientos de detenciones arbitrarias llevadas a cabo con fuerza excesiva. El Estado de Nicaragua no llevó a cabo ningún proceso judicial independiente en contra de éstos y tampoco ha reparado a las víctimas, como así lo destacó el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua.³

Al contrario, el Estado ha ido criminalizando y judicializando a las organizaciones no-gubernamentales y organismos de derechos humanos nacionales que daban apoyo a las víctimas en forma de acogida de sus denuncias, tratamiento psicológico y asistencia social. La Asamblea Nacional, dominada por el partido de gobierno, despojó de su personería jurídica a los tres organismos de derechos humanos nacionales no-estatales (CENIDH, CPDH y ANPDH). Tras esta modalidad de represión, el constante asedio, las amenazas, el encarcelamiento de algunos de sus trabajadores defensores y la toma de sus instalaciones, la mayoría de los trabajadores defensores restantes han tenido que exiliarse. Esta situación pone en grave situación de riesgo a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.

Expuesto lo anterior y con el fin de realizar esta denuncia el Equipo de Trabajo⁴ que la elaboró en apoyo a las víctimas llevó a cabo una sistematización de los testimonios de las mismas y una encuesta de seguimiento. La encuesta de seguimiento se realizó entre el 1 de abril y 20 de mayo del 2022. Consiste en un protocolo de

¹ "Informe Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha Contra la Impunidad", 2021, disponible en: <https://nicaragualucha.org/informe/>

² Véase p. ej. "Silencio a cualquier costo: Tácticas del estado para profundizar la represión en Nicaragua", Amnistía Internacional, 2021, disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/3398/2021/es/>. En Nicaragua existe un mecanismo de revisión en conjunto con el sistema interamericano para corroborar la prisión arbitraria. Esto incluye al Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas (<https://presasypresospolicosnicaragua.org/>) el CENIDH, y el MESENI. En este momento siguen presas más de 180 personas por ejercer sus derechos civiles y políticos, incluyendo defensores de derechos humanos; periodistas; líderes estudiantiles y campesinos; dirigentes empresariales y políticos; precandidatos al proceso electoral de noviembre del 2021 y disidentes comunes.

³ "Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua", 2022, disponible en: <https://www.ohchr.org/es/statements/2022/03/annual-report- united-nations-high-commissioner-human-rights-situation-human>

⁴ El Equipo de Trabajo se conformó por miembros de la Comisión de Justicia de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y una investigadora del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam (CEDLA-UVA), con el acompañamiento de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).

consentimiento; una hoja de datos personales; una de detalles sobre su detención y una de su excarcelación; seguida por dos secciones de preguntas acerca de las secuelas de las torturas y los tratos inhumanos, crueles y degradantes que sufrieron, las modalidades de violencia de Estado y violaciones a sus derechos humanos y civiles en sus vidas poscarcelarias y, si aplica, el desplazamiento forzado que éstas causaron tanto a lo interno del país como hacia el extranjero (refugio). Las preguntas realizadas estaban dirigidas a conocer y obtener el consentimiento de los entrevistados para incluir su testimonio en la denuncia; a elaborar un perfil personal, jurídico y de estado salud por cada caso; a obtener información sobre las secuelas de las vulneraciones que sufrieron durante su presidio; a conocer las vulneraciones que sufrieron una vez excarcelados y a entender como éstas incidieron en su desplazamiento forzado. La encuesta fue desarrollada con base en el marco internacional de los derechos humanos, la Convención Contra la Tortura y los principios rectores del desplazamiento interno de la ACNUR.

Los treinta casos considerados se tuvieron lugar y se encontraron distribuidos en seis centros de detención policiales (Jinotepe, Juigalpa, León, Masaya, Managua y Nindirí), la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua conocida como “El Chipote” y tres centros penitenciarios: el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro conocido como “La Modelo”, el Sistema Penitenciario de Mujeres conocido como “La Esperanza” y el Sistema Penitenciario Regional de Cuisalá. Sin embargo, no todas las personas detenidas llegaron hasta el sistema penitenciario, varias permanecieron en las celdas de la DAJ.

Notarán al leer el informe que no todos los testimonios llevan el nombre de la víctima. El carácter confidencial de estos testimonios se fundamenta principalmente en el temor de las víctimas a recibir represalias por parte de las autoridades con base en amenazas de recaptura, violencia y/o muerte ya recibidas. Si bien se obtuvo el consentimiento de sistematizar los testimonios de las 30 víctimas y compartir (partes de) sus narraciones, no todas accedieron a la publicación de su nombre. Lo anterior refleja la realidad de que existe un temor de parte de las víctimas en cuanto a la posibilidad real de represalias en su contra o de sus familias, existe un ambiente de incertidumbre y de total desconfianza de parte de la sociedad por la falta de independencia del sector judicial, y por la continuación de la represión en Nicaragua en la que se puede afirmar que el Estado de derecho no está vigente y se ha instaurado un ambiente generalizado de arbitrariedad.

Parte I: TORTURAS

Entre diciembre del 2020 y enero del 2021 recopilamos⁵ 30 testimonios de personas excarceladas (20 hombres, 10 mujeres) acerca del uso de la violencia y la tortura durante su detención y presidio. En esta sección del informe exponemos los diferentes usos de la violencia y métodos de tortura que sufrieron e identificamos a las instituciones estatales y paraestatales (partidarios del partido de gobierno) responsables.

Violencia física en la detención

En la detención, 25 de los 30 víctimas reportaron el uso de fuerza excesiva por parte de los capturadores. En 13 de estos casos la víctima fue golpeada con tanta fuerza que se le provocaron moretones o raspones. En tres de estos casos la víctima resultó con heridas graves o quebraduras producto de su detención y en uno de los casos la víctima fue desnudada parcialmente. Cabe destacar que en 20 de los casos la víctima fue agredida *ya estando esposado* – en 15 de estos la víctima fue agredida tanto para lograr su captura como una vez bajo dominio de los capturadores.

⁵ La Comisión de Justicia de la UPPN llevó a cabo la recopilación física de estos testimonios.

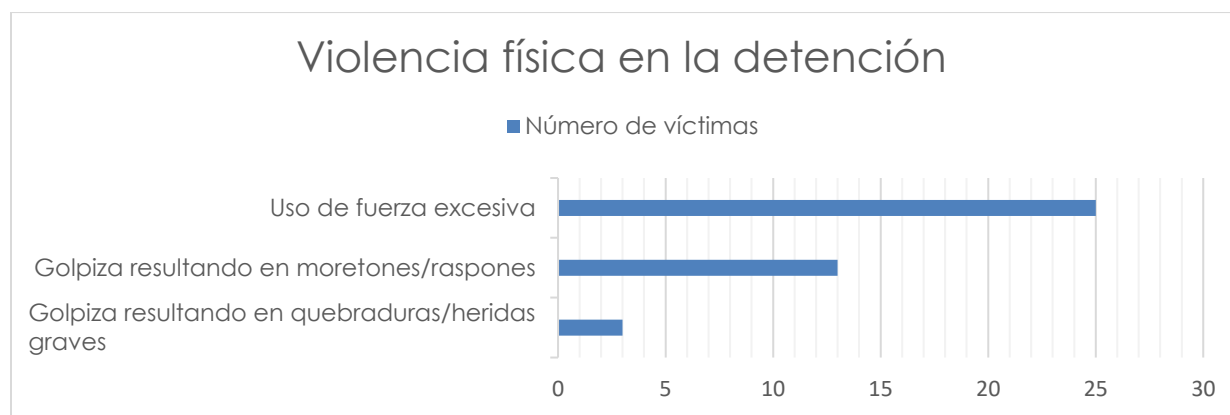


Tabla 1. Violencia física en la detención (n=30)

“El 12 de noviembre del 2019 fui capturado al salir de [ubicación omitida]. Los agentes policiales me agarraron con exceso de fuerza, me daban patadas y golpes [...] y me asfixiaron parcialmente hasta montarme en una patrulla, donde fui apuntado con una escopeta y amenazado de muerte mientras me trasladaban al Chipote [DAJ]. Iba enchachado con las manos para atrás en la tina de la camioneta [patrullera] y un oficial me ordenó arrodillarme, yo no lo hice, y me tomó del pelo y me estrelló la cara contra la tina del vehículo. Me puso su bota en la cabeza y me iba aplastando con más fuerza, gritándome que me iba a matar. Cuando llegué al Chipote, me bajaron [de la patrulla] y me tomaron dos oficiales de policía por la espalda, uno de ellos me comenzó a ahorcar y el otro estaba adelante y me dio varias bofetadas, hasta que me desmayé. Así me metieron [a las instalaciones].” – Víctima 14, DAJ.

En el 83% de los casos las fuerzas que llevaron a cabo la detención fueron agentes de la Policía Nacional. Estos en su mayoría fueron operativos mixtos donde tuvieron presencia agentes uniformados regulares (16), agentes uniformados de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP, 8) y agentes vestidos de civil (6). Sin embargo, en el 40% de los casos, es decir en 12 casos, actores paraestatales fueron parte del operativo de la detención. Siete de estas detenciones se realizaron *en conjunto* con agentes de la Policía Nacional y uno en conjunto con miembros del Ejército Nacional. En cuatro ocasiones operaron solos, entregando a las víctimas detenidas ilegalmente (mejor dicho, secuestradas) a las fuerzas policiales de estaciones locales hasta horas después de su detención. En todos los casos donde hubo involucramiento de actores paraestatales en la detención hubo un uso excesivo de fuerza y en cinco también de golpizas resultando en moretones o heridas graves.

Tortura durante el presidio

Una vez detenidas y bajo custodia de la Policía Nacional o el Sistema Penitenciario, todas las víctimas incluidas en este informe fueron torturadas. Se reportó una incidencia de tortura en 16 categorías de métodos de tortura de la Comisión Valech.⁶ En su mayoría (26 de los 30) las víctimas fueron torturadas en más de una manera. Es más, once de las víctimas reportaron la aplicación de entre cuatro y nueve métodos de tortura en su caso. No obstante la cantidad de métodos aplicados, el 93% de las víctimas reportó el uso *reiterado* de los métodos de tortura, en especial de amenazas y golpizas durante los interrogatorios.

“En varias ocasiones agentes policiales del Chipote [DAJ] me sacaban de la celda me decían que me vistiera con una ropa sucia que estaba tirada en el pasillo. Me llevaban al cuarto de interrogación esposado con las manos hacia atrás, me tenían de pie y antes de comenzar a interrogarme me golpeaban en el estómago, me

⁶ Estas categorías se retoman de la Comisión Valech (la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en Chile) debido a su amplitud y aplicabilidad al contexto de Nicaragua.

arrodillaban y me daban patadas en el estómago, eso lo hicieron varias veces, casi en todos los interrogatorios.” – Víctima 22, DAJ.

“Habían tres policías, dos vestidos de civil y otro con el uniforme, me sentaron en una silla sin brazos, solo tenía el respaldar, comenzaron a interrogarme [...] entonces uno de los otros policías agarró una bolsa de plástico, me la metió en la cabeza y comenzó a asfixiarme y el otro me golpeaba en la boca del estómago. Me sacaron la bolsa de la cabeza y me pegaron patadas en la cabeza y la cara. Siguieron haciéndome preguntas yo no contestaba nada, el más mayor, era su jefe creo, sacó una pistola, me golpeó en el estómago otra vez y me metió la pistola en la boca, ‘ahora sí vas a hablar’ me dijo, me saco la pistola, yo me quedé callado, montó el arma y me la volvió a meter a la boca. Hizo eso como cuatro veces. Después de eso agarraron un hierro, me dieron en las costillas, me caí de la silla donde estaba sentado, en el suelo me levantaron prácticamente a patadas, quede arrodillado, me comenzaron a agarrar a patadas de nuevo y me vuelvo a caer completamente, tomaron un [arma] AK-47 y comenzaron a darme culatas en la columna y toda la espalda mientras otro me seguía dando patadas en el estómago y la cabeza. Luego de eso me levantan y me llevan a una celda, ahí fui socorrido por otros presos políticos, yo no podía ni levantarme del dolor.” – Víctima 25, Estación policial de Masaya.

“Me dijo [el oficial a cargo del interrogatorio] que ya que yo no quería cooperar iban a traer a mi hija a [ubicación omitida], porque mi hija ya era grande y querían abusar sexualmente de ella y comenzó de escribirme todos los actos sexuales que iban a hacer con la niña ya que yo no estaba cooperando.” – Víctima 8, DAJ.

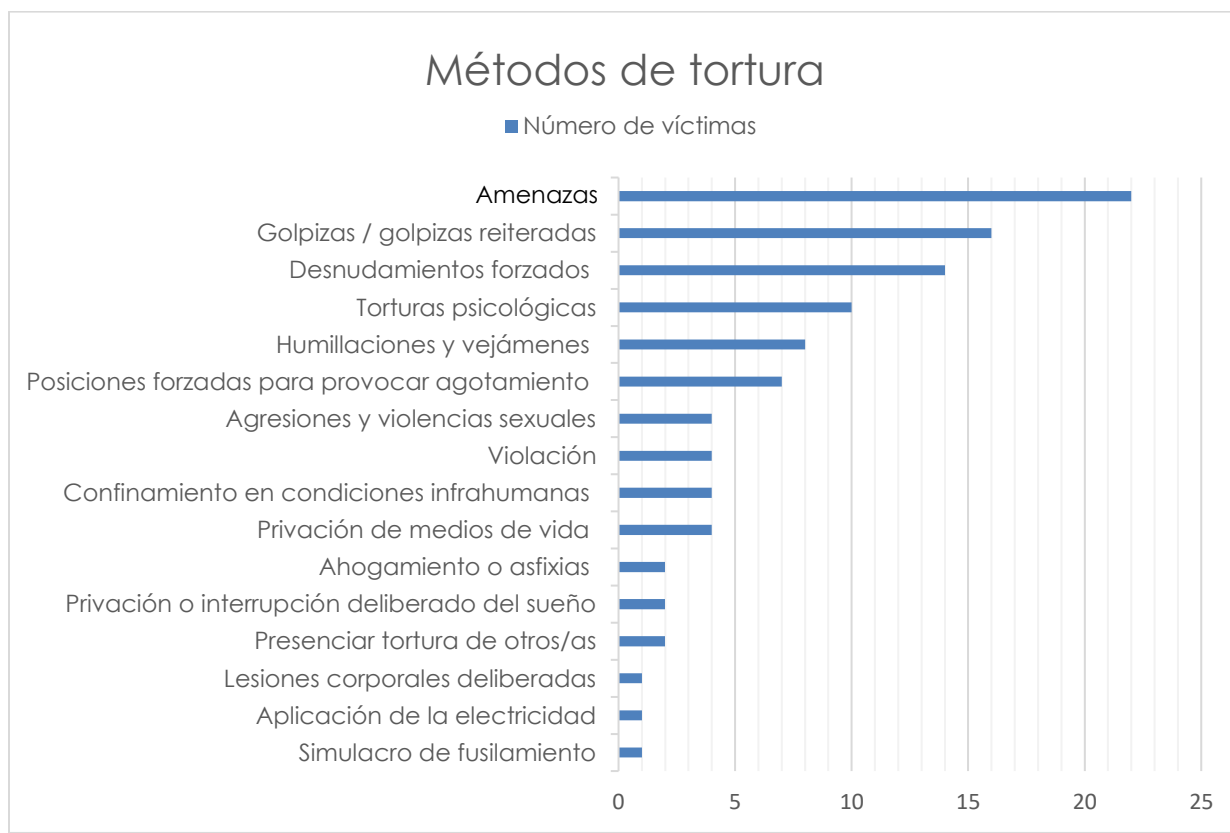


Tabla 2. Métodos de tortura (n=30)

Los agentes policiales fueron en la mayoría de los casos los perpetradores de actos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes: 29 de las 30 víctimas indicaron a agentes policiales como los actores

materiales de las torturas que sufrieron. En tres de estos casos agentes de la Policía Nacional se turnaban con actores paraestatales en la realización de actos de tortura, que siempre fueron llevados a cabo dentro de las estaciones policiales. En todos estos casos se reporta el uso de golpizas excesivas, incluyendo posiciones forzadas o asfixias.

Dos de las víctimas, ambas mujeres, indicaron además a custodios del Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” como actores materiales de torturas psicológicas. Ninguna de las 30 víctimas reportó haber recibido atención médica por sus torturas estando privadas de su libertad. Solo dos indicaron haber recibido una atención médica parcial por afectaciones médicas provocadas por las torturas. Esto indica una negligencia grave y sistemática por parte de las autoridades policiales y penales de su deber institucional de auxilio y asistencia médica. Esta falta sistemática de atención y revisión médica evidencia la preocupación del Estado por no dejar huellas administrativas de los actos cometidos en contra de las víctimas, obstaculizando así el proceso de responsabilización, justicia y reparación a las víctimas. En la mayoría de los casos, para asegurar que las marcas físicas de sus actos no fueran observados por familiares o representantes legales de las víctimas, no informaron debidamente a estos de la detención, no se les permitió el ingreso al centro de detención hasta varios días sino semanas después de la detención, y/o amenazaron a las víctimas con mayores actos de violencia o violencia en contra de sus familiares si hablasen de lo que les sucedió.

Tendencias importantes

En el 97% de los casos, las víctimas reportaron que (una parte de) los hechos de tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes aquí descritas tuvieron lugar en estaciones de policía que fungen como centros de detención provisional y la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, conocida como “El Chipote”. El Chipote es un centro de detención construido en los años 30 del siglo XX que se encuentra parcialmente bajo tierra en la orilla de la Laguna de Tiscapa. Tiene una larga historia de utilización como centro de torturas, tanto bajo la dictadura somocista como posterior a la revolución Sandinista durante la guerra civil y en varias ocasiones aisladas hasta el estallido de las protestas del 2018. Todas sus celdas son “de castigo”, en su mayoría muy pequeñas y en estado insalubre, sin adecuada ventilación y sin acceso a luz natural. En el marco de las protestas y su represión se retomó el uso del Chipote como centro de torturas. Sin embargo, en febrero del 2019 se inauguraron las nuevas instalaciones de la DAJ bajo el nombre Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocidas como “El Chipote Nuevo”, donde fueron trasladadas en su mayoría las personas detenidas en las viejas instalaciones. Aunque estas instalaciones nuevas cuentan con una infraestructura más adecuada y salubre, las prácticas de tortura persisten en su interior.⁷

Casi todas las víctimas incluidas en este informe pasaron por las instalaciones viejas de la DAJ, algunas también por las nuevas, y reportaron interrogatorios repetitivos a todas horas del día durante varios días, donde a menudo se les amenazaba o se les golpeaba intentando sacarles “información” que coadyuvara a la detención de otras personas participantes de las protestas antigubernamentales. Se nota una tendencia en los casos de las mujeres de amenazas con hacer daño a sus hijas/os por medio de la violencia sexual y/o de matar o apresar a familiares (padres o parejas). También se amenazaba con la realización de torturas físicas. Casi todas las mujeres fueron desnudadas forzosamente en repetidas ocasiones. En el caso de los hombres a menudo se utilizó la violencia física como método de tortura (golpizas reiteradas, posiciones forzadas, colgamientos, asfixias y aplicación de la electricidad). Hubo una tendencia manifestada en algunos casos de enfocarse en los genitales: forzar la apertura de las piernas y propinar varias patadas o golpes a los genitales durante varios minutos hasta horas, provocando que se desmayara la víctima y se le despertara de bofetadas en la cara solamente para seguir con las patadas en sus partes íntimas.

⁷ Véase el “Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, 2022, disponible en: <https://www.ohchr.org/es/statements/2022/03/annual-report-united-nations-high-commissioner-human-rights-situation-human>

Cinco de las víctimas reportaron el uso de agresiones sexuales o violación. De las cuatro víctimas que fueron violadas, tres son hombres. Cabe destacar que las dos víctimas que fueron violados mediante la penetración por el órgano sexual del agresor fueron una mujer y un hombre de la diversidad sexual. Los otros dos hombres víctimas fueron violados mediante la penetración con un objeto – respectivamente un palo y un bastón de policía. En todos estos casos hubo presencia de otros agentes (para)policiales durante la agresión sexual o violación. Aunque en todos los casos se le volteó o se le tapó los ojos a la persona previo al acto, se estima que los actores de estos hechos fueron agentes policiales. Tampoco en estos casos hubo atención médica posterior al hecho, provocando graves secuelas en las víctimas.

Además de lo ya mencionado, se destaca que en algunos casos se le tomaron fotografías a las víctimas estando desnudas, constituyendo un acto de humillación. Otras humillaciones eran el constante uso de lenguaje obsceno al referirse a la persona detenida; reírse de ellos; y/o mostrarlo desnudo. De último, quisiéramos destacar una práctica de violencia extrema llamado el “túnel del diablo”, llevado a cabo en tres casos.

“En la estación de policía de Nindirí me esposaron con las manos para atrás, me ubicaron de rodillas con la cara contra una pared, los policías de la estación hicieron fila para pasar uno por uno golpeándome – a eso le llaman el túnel del diablo – me estrellaron contra la pared, me golpearon con cascos, palos, me dieron patadas, me guiñaron del pelo y me estrellaron la cara y la cabeza contra la pared, fueron casi 20 oficiales que portaban pasamontañas. Luego me tomaron de nuevo los paramilitares, me llevaron a un pasillo muy pequeño, me dieron un culatazo con un [arma] AK-47 en el hombro derecho y me patearon con brutalidad detrás de las rodillas para tirarme al suelo pero logré levantarme rápido, me golpearon en el estómago varias veces y me dieron otro culatazo en el hombro izquierdo y me patearon detrás de las rodillas varias veces hasta que lograron arrodillarme, intente levantarme, me guiñaron de los hombros hacia atrás y me tiraron al suelo boca arriba esposado con las manos hacia atrás, me dieron una patada en el pecho y una en el estómago con mucha fuerza y se me pararon con presión en los hombros y el estómago para que no me levantara, me bajaron parcialmente el pantalón, me abrieron las piernas y me golpearon, patearon y pararon durante 2 horas en los testículos, las piernas, los hombros y el estómago, eran los 4 o 5 paramilitares del mismo grupo que me habían secuestrado [detenido ilegalmente]. Se turnaban entre sí para patearme en los testículos, uno de ellos me apuntaba y gritaba que todavía no me iba a matar y que me iba a ‘morir despellejado y que antes me iban a vaciar los huevos a patadas’. Habían policías en el mismo pasillo atestiguando el hecho. Me desmayé varias veces y me despertaban con cachetadas en la cara, hasta que llego el comisionado de apellido Avellán y les dio la orden de llevarme al Chipote [DAJ] en Managua para ser procesado.” – Víctima 2, Estación policial de Nindirí.

Parte II: EXCARCELACIÓN, SECUELAS Y PERSECUCIÓN

Al ser víctima de torturas y no recibir tratamiento médico alguno durante el periodo de presidio, además de ser excarcelado en un contexto de profundización de la represión general en el país, indagamos sobre las secuelas de la tortura y diferentes tipos de violaciones de derechos humanos y civiles que sufren las personas excarceladas tras un periodo de presidio político. Para ello, realizamos entrevistas de seguimiento a 21 de las víctimas de tortura incluidas en la primera parte (16 hombres, 5 mujeres). De estas personas, 16 fueron detenidas en el 2018 y 5 en el 2019. A excepción de una persona que fue excarcelada en 2018, todas fueron excarceladas a lo largo del 2019 (7 en febrero, 3 en marzo, 1 en abril, 5 en mayo, 1 en junio, 1 en julio y 2 en diciembre). Quiere decir que todas fueron parte de las primeras dos olas de detenciones en el marco de las protestas y su represión, tanto como de las primeras tres instancias de excarcelaciones grupales, incluida la excarcelación producto de la Ley de Amnistía. Sin embargo, ninguno fue puesto en libertad completa, ya que la modalidad de excarcelación a menudo era la de “régimen de convivencia familiar” (libertad condicional) o “casa por cárcel” (medida cautelar alterna). Ha sido reportado anteriormente que de su ‘generación’ de

personas presas políticas al menos 42 han sido recapturados, es decir, que se les ha vuelto a detener arbitrariamente reabriendo su causa penal anterior o abriendo una nueva.

Secuelas directas producto del encarcelamiento y las torturas sufridas

En todas las víctimas se combinan secuelas físicas, psicológicas, sociales y económicas. A menudo, dentro de estas categorías, se combinan también varios padecimientos y restricciones de derechos.

Debido a las pésimas condiciones en las celdas, la falta de atención médica real, la alimentación inadecuada y el estrés provocado por los malos tratos y los procesos judiciales politizados llenas de irregularidades y sin un derecho a la defensa adecuada, las personas presas políticas desarrollaron patologías médicas durante el presidio. Se destacan la gastritis y los problemas de la presión como padecimientos crónicos y un alto índice de hongos o infecciones en la piel como padecimientos temporales, sobre todo en las personas que estuvieron encarcelados en La Modelo.

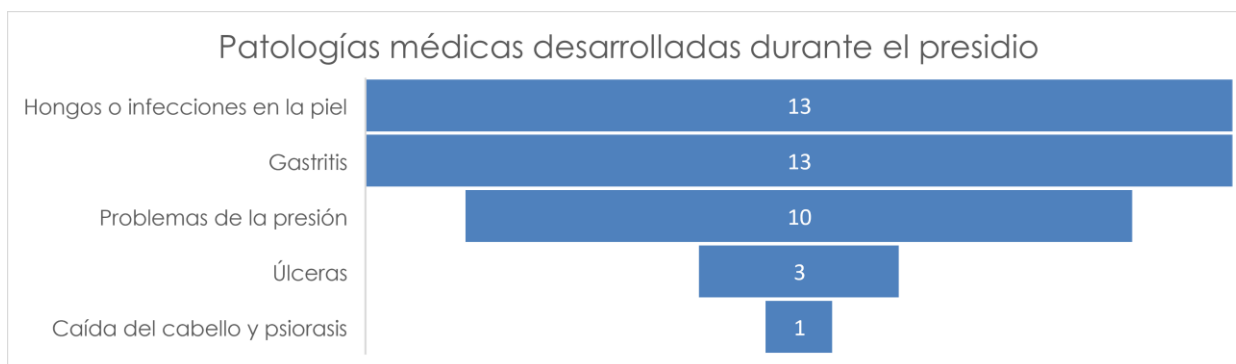


Tabla 3. Patologías médicas que se desarrollaron durante el presidio (n=21)

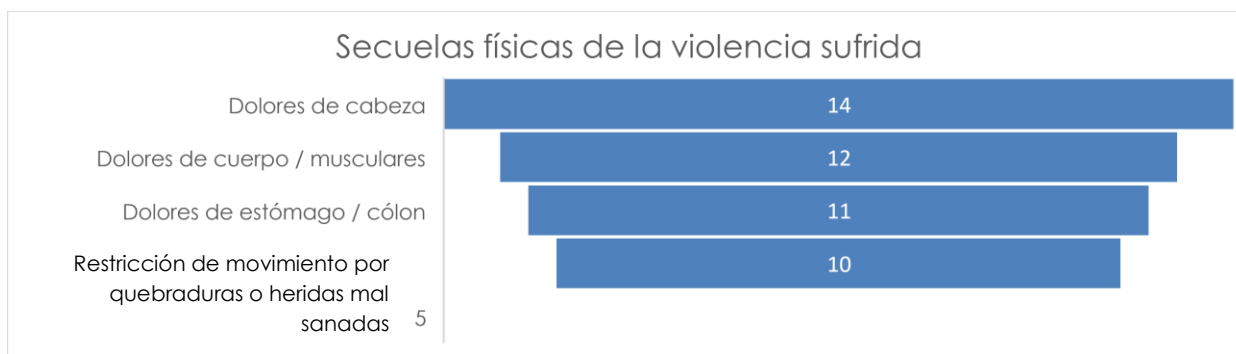


Tabla 4. Secuelas físicas de la violencia sufrida (n=21)

Como secuelas físicas entendemos padecimientos recurrentes o permanentes debido a lesiones provocadas por golpizas u otras torturas físicas. Las restricciones de movimiento incluyen cuatro casos de lesiones en la espalda y en los hombros. Se incluyen aparte una infección por herida de bala, infección en las encías, una hernia, un bulto en el seno y opresión permanente en la pelvis producto de los golpes, y dos lesiones permanentes en la audición (uno de los cuales a un 75% de la capacidad auditiva). Una víctima padece de convulsiones debido a una lesión en la cabeza producto de la golpiza brutal que recibió en su detención y una víctima ha resultado VIH positivo tras la violación que sufrió detenido.

Además de las graves y a menudo permanentes secuelas físicas del periodo de detención arbitraria, todas las víctimas también sufren secuelas psicológicas y de salud mental. Algunas víctimas también reportaron sufrir de claustrofobia, ansiedad, espasmos musculares, disociación y aislamiento.

Todas estas secuelas psicológicas y de salud mental que aparecen abajo en la tabla 5 son síntomas del síndrome de estrés postraumático (PTSS). En su mayoría (18) las víctimas recibieron alguna forma de asistencia psicosocial a través de organizaciones no-gubernamentales (ONG) y tratamiento médico de los padecimientos físicos en clínicas privadas posterior a su excarcelación. Sin embargo, tras la represión renovada por parte del Gobierno en el 2021 se discontinuaron casi todas las posibilidades de apoyo y acompañamiento por su criminalización, que conllevó al cierre de las ONG y la persecución y el despido de personal de salud.

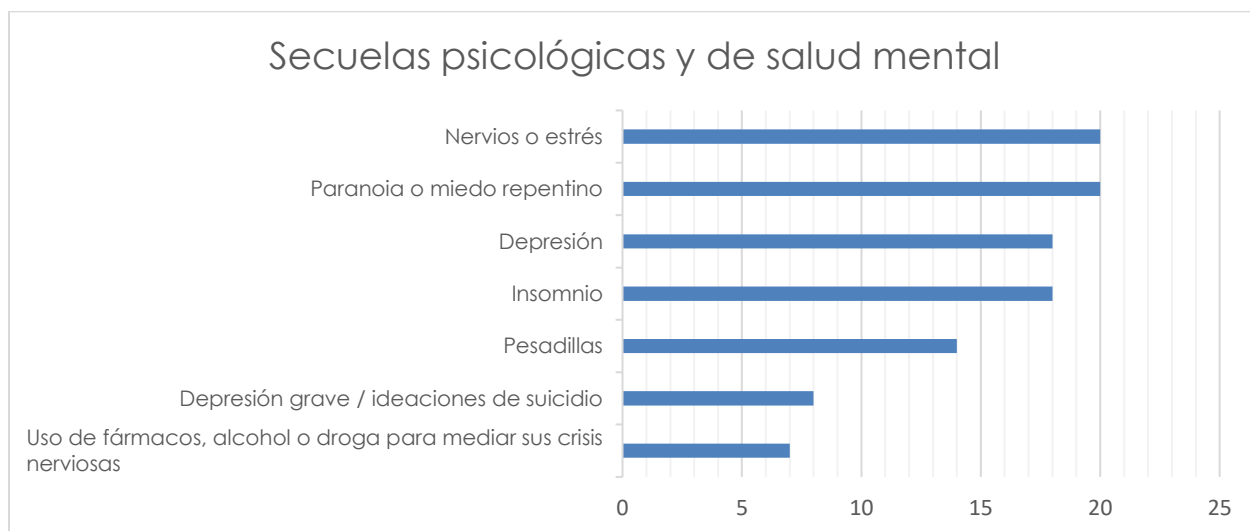


Tabla 5. Secuelas psicológicas y de salud mental (n=21)

Finalmente quedan las secuelas sociales y económicas. En este sentido el encarcelamiento arbitrario debido a la participación de protestas antigubernamentales tuvo un impacto contundente. La mayoría de las víctimas reportó la pérdida o expulsión de su trabajo (17), la pérdida de lazos familiares (17), de amistades (17), la pérdida o expulsión de su casa (8) y la expulsión del centro educación (12). Esto indica una situación de vulneración absoluta al *derecho humano al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación*. También indica una violación al derecho humano a la educación que, como veremos abajo, a menudo también impacta a los familiares directos, tales como la negación a la educación (primaria o secundaria) de los hijos/as de las víctimas o la negación de entrada universitaria a sus hermanos/as.

La vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas ha persistido fuera de las cárceles e indica una sistemática violación al derecho humano a la *no-discriminación*, específicamente la *no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de opinión política*. Está claro que en Nicaragua las personas excarceladas políticas han sido criminalizadas a tal punto que sufren de una vulneración constante de sus derechos y libertades fundamentales.

“En el hospital del departamento me negaron la atención, fue en febrero 2021, para la espalda. Es que en la espalda recibí un golpe en La Modelo cuando la muerte de don Eddy [Montes; un preso político de la tercera edad que fue asesinado durante un disturbio en La Modelo].” – Víctima 20.

“Fue iniciando dentro de la cárcel [...] afuera igual nunca me atendieron. Busqué atención médica pública porque que había salido de la cárcel enfermo, pero sufrí una discriminación horrible en todo el pueblo, tanto por ser de la oposición política como por ser de la diversidad sexual. Después solo busqué atención médica privada, ahí nunca me negaron la atención.” – Víctima 28.

“Me borrarón todo el historial de las notas en la UNAN-León [...] incluso habiendo profesores que sabían que me habían dado clases. Cuando quiero un certificado de secundaria para ver como no perder los 5 años y reincorporarme en una universidad privada [...] el MINED en [ubicación omitida] no quiso entregar el de la secundaria.” – Víctima 15.

“A mis tres hijos menores se les negó el estudio en el colegio público de Ticuantepe y a mi hijo mayor en la UNAN y la UNI (dos universidades públicas en Managua).” – Víctima 23.

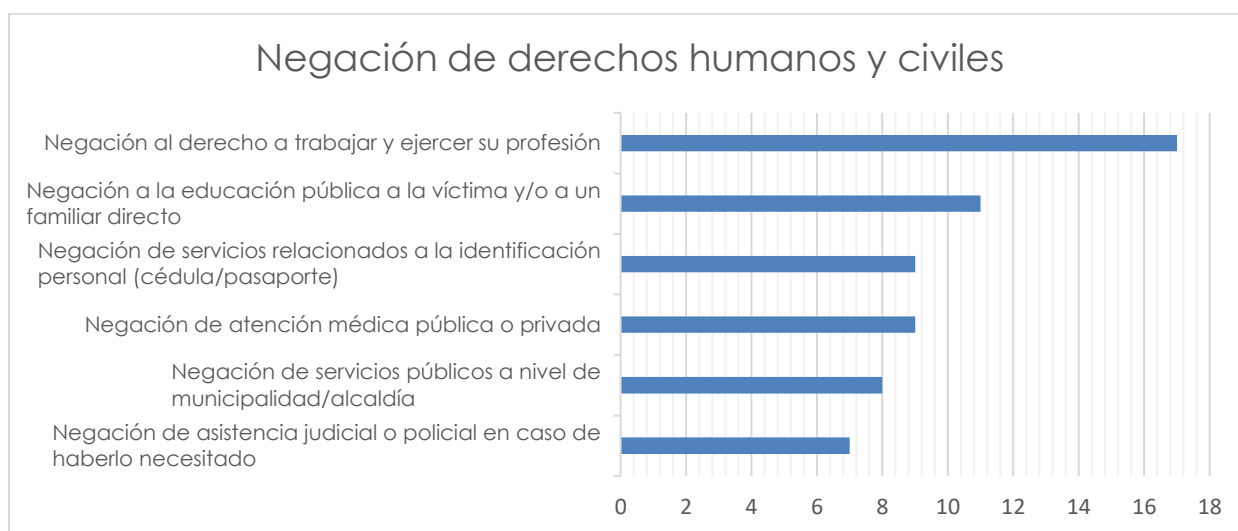


Tabla 6. Negación de derechos humanos y civiles (n=21)

Debido a esta situación, las víctimas sufren una constante exclusión de sus derechos como ciudadanos y de la participación en la vida pública. Por tantas negaciones, las víctimas ya no se sienten seguros de usar los servicios públicos y en su mayoría los evitan.

Asedio, amenazas, violencia

Las secuelas del presidio y las torturas, tanto como la vulneración de varios derechos fundamentales de las víctimas, se complementaron en todos los casos por diversas formas de violencia estatal y paraestatal. Estas se dividen a groso modo entre dos tipos de acciones: por un lado el asedio (casi constante) por parte de agentes de la Policía Nacional y agentes paraestatales, y por otro las amenazas y agresiones físicas y verbales que si se cometieran dentro de las instalaciones penales se considerasen actos de tortura físicas o psicológicas. Siete de las víctimas además sufrieron una nueva detención arbitraria temporal (de hasta 3 días).

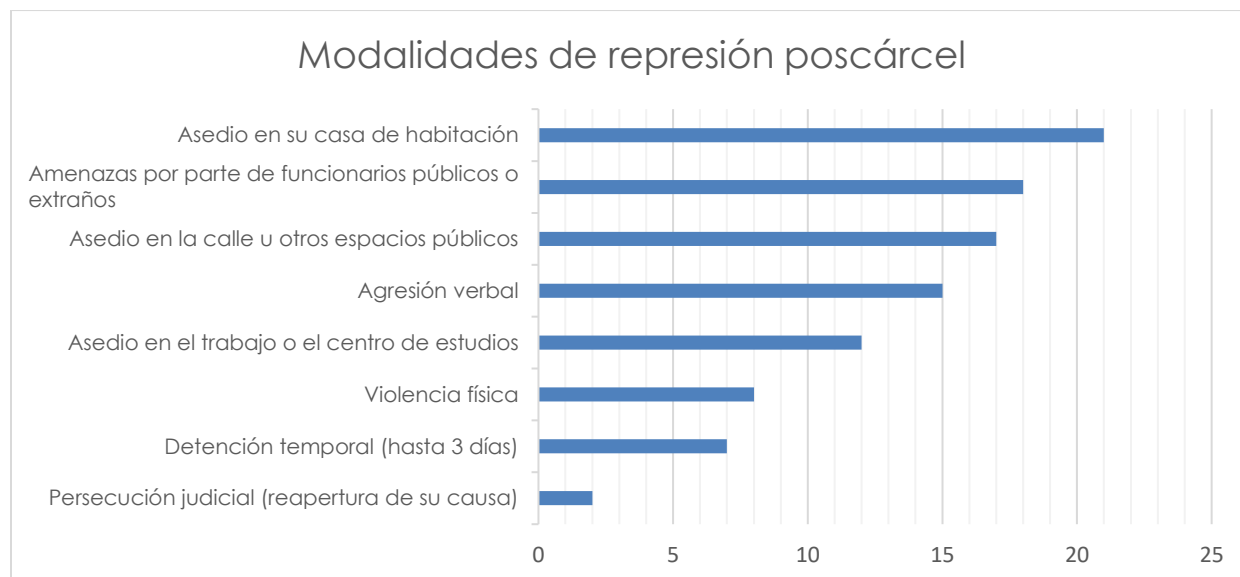


Tabla 7. Modalidades de represión poscárcel (n=21)

“Sufrí asedio por parte de policía de Ciudad Sandino en mi casa, de manera repetitiva. Se estacionaban frente a la casa obstruyendo las entradas de la casa, intimidando a la familia. A veces eran más de diez agentes movilizados en microbús, camionetas y motos. [...] También sufrí asedio por parte de paramilitares de Ciudad Sandino de manera repetitiva, me seguían en lugares públicos de la calle cuando me movilizaba con mi mamá. Los fanáticos del FSLN (partido de gobierno) organizados en el Consejo de Poder Ciudadano (CPC) de mi barrio [...] anotaban día a día mis movimientos. Estos asedios fueron con intimidación tomándome fotos e insultándome a mí y a mi familia.” – Víctima 18.

“El 23 de noviembre del 2019 me llegó a amenazar a mi casa un paramilitar, decía que en esta ya no me capturaban, sino que me iban a desaparecer. Se paró en el portón, me habló con palabras soeces, me decía que estaba dirigiendo gente, que me vigilaban, me tomó foto, y me dijo que ahora ya no iba a caer preso sino que me iban a desaparecer.” – Víctima 32.

“En la calle que provocaban era amenazas así de muerte, ‘vas a ver que vamos a hacer’, que ‘tu mamá que vive en tal lado’ – te lo dicen directamente y les vale que los veas. Antes me hacían amenazas por Facebook también, incluso cuando empezó el Covid, empezaron a decir que nosotros teníamos Covid, que la gente no se nos acercara, estigmatizándonos. Los tales Cadejos (un grupo paramilitar que opera en regiones del Pacífico) publicaban fotos mías, de mi pareja, de mi mamá, que deberían de matarnos, quemarnos, violarnos, etcétera.” – Víctima 15.

“El 17 de abril del 2021 venía a dejar comida a mi hermano (actualmente preso político) unos agentes policiales me bajaron del bus, me llevaron a la estación policial y me dijeron que me esperara que el jefe de la policía quería hablar conmigo. Cuando este llegó me dijo que no quería ver ninguna pinta azul y blanca más en Juigalpa, me golpeó la cara, me quitó el teléfono y me dijeron muchas palabras obscenas.” – Víctima 20.

“Sufrí una detención ilegal por agentes policiales el 7 de enero del 2020, sin avisarme de los motivos a investigar. La detención fue con violencia y sin orden de captura, sin explicación. [...] Volví a ser detenido el 10 de diciembre del 2021 por agentes policiales. Me trasladaron al distrito uno (cárcel policial en Managua) por investigación, pero no me dieron explicaciones. Sufrí violencia al momento de la detención

y en los interrogatorios me golpearon, me amenazaron con mis familiares y me metieron en miedo con mi mamá y mi novia.” – Víctima 18.

Nuevamente, se nota una tendencia clara de colaboración entre agentes de la Policía Nacional y vigilantes paraestatales, incluyendo miembros del partido de gobierno, responsables de actos de violencia en contra de las víctimas. Además, la colaboración entre fuerzas estatales y partidarias ha facilitado la manutención de una extensa red de vigilancia extrajudicial que hostiga de forma casi permanente a las personas excarceladas víctimas de tortura a no ser que éstas se reducen completamente al silencio y el no-ejercicio de sus derechos fundamentales y civiles. Esto ha conllevado a una experiencia de “muerte civil” generalizada: todas las víctimas nos indicaron ya no sentirse ciudadanos completos por no poder ejercer sus derechos y siempre tener que cuidarse de no sufrir otra violación a sus derechos.

“Uno no puede expresarse libremente y debe siempre cuidarse de sufrir alguna violación a sus derechos; no se siente segura de usar los servicios públicos y de usar sus derechos civiles y políticos. Así mismo no he podido conseguir trabajo estable y ejercer mi profesión. Al trabajar por cuenta propia me siento amenazada por hacer uso de mis derechos.” – Víctima 5.

Finalmente, cabe destacar que muchas de las víctimas indican que sus familias han sufrido del mismo tipo de exclusiones de la vida pública y vulneraciones a derechos fundamentales que ellos.

“Mis hermanas no han podido retomar sus estudios, tampoco van a las instituciones estatales ni a la policía ni servicios de salud, solo usamos servicios privados. Mi mamá ha tenido emergencias [médicas] y no la han atendido en el hospital público Alemán-Nicaragüense.” – Víctima 1.

“A mi mamá la apuntaron con un arma tres veces, lo otro cuando me hacía la visita en La Modelo quedaba desde un día antes en el Popol Nah en Managua, una vez ahí la encañonaron y la policía le robó todo. Le pasaban tomando fotos todo el tiempo y fue despedida de un trabajo público, le robaron la liquidación y el dinero que tenía en sus cuentas. Mi hermana se tuvo que exiliar a Costa Rica [por todo esto].” – Víctima 15.

Desplazamiento forzado

Las Naciones Unidas definen así el desplazamiento forzado: “*personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos*” (ONU, 1998). Tras la represión generalizada y las múltiples violaciones a los derechos humanos sufridas por las víctimas, más de la mitad se ha visto en la obligación de desplazarse internamente y/o hacia el exterior. De las 21 víctimas con quienes pudimos realizar entrevistas de seguimiento, casi todas tuvieron experiencias (temporales o permanentes) de desplazamiento interno, culminando en 12 de los casos con el refugio al exterior. Casi todas las víctimas que se vieron obligadas a refugiarse en el exterior primero fueron desplazadas internamente, permaneciendo en varias ocasiones en casas de seguridad (*safe houses*) – casas de familiares o amigos/as en otros barrios, pueblos o ciudades, o casas encontradas a través de las redes de los movimientos opositores – o bien cambiándose de domicilio de manera permanente o reiterada dentro de Nicaragua antes de salirse del país.

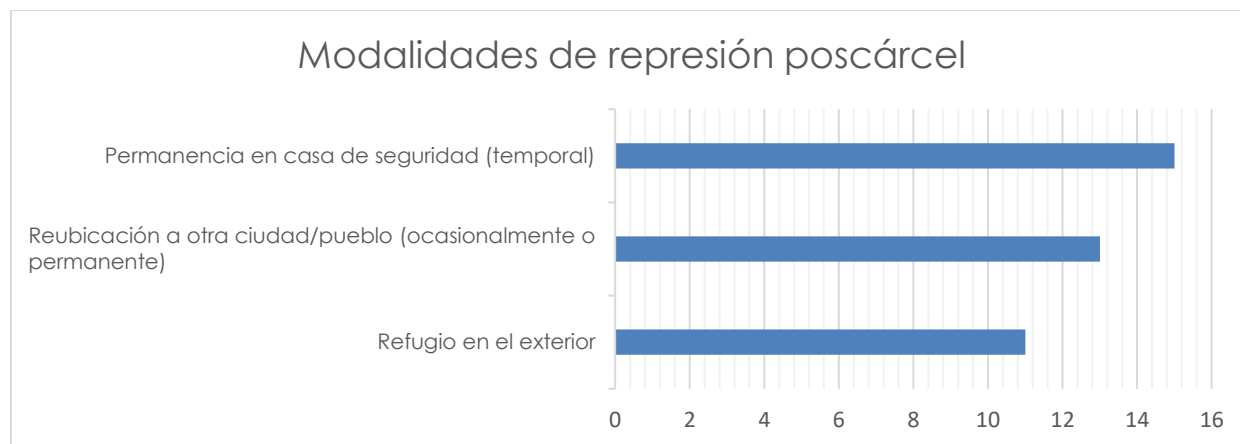


Tabla 8. Modalidad de desplazamiento forzado

De las personas que tuvieron que refugiarse al exterior, 6 se encuentran actualmente en Costa Rica, 3 en Estados Unidos y 3 en Europa. Todos, salvo una persona, se refugiaron hasta después de abril 2021, cuando el Estado de Nicaragua dio inicio a una nueva oleada de detenciones arbitrarias en el marco de las elecciones previstas para noviembre del 2021. Todas salieron de Nicaragua de forma irregular (por “puntos ciegos” en la frontera) y todas están en proceso de solicitud de refugio o asilo político.

Un obstáculo común fue la obtención de la identificación internacional (el pasaporte), entrega de la cual en varios casos les fue negada o postergada. En algunos casos fueron sujetos además a interrogatorios por parte de funcionarios del Migración y Extranjería, donde varios se dieron cuenta que había una “retención migratoria” en su contra, que no les permitía salir del país de manera formal.

Por su compromiso con el activismo, la política nacional o sus familias, muchas de las víctimas no querían dejar el país hasta no encontrarse en situaciones que presentaban altos riesgos a su integridad física. Por tanto, en 10 de los 12 casos, la decisión de salir fue de primera urgencia, después de recibir amenazas creíbles de muerte por parte de actores paraestatales o de recaptura por parte de las autoridades. En tres de estos casos fue después de sufrir violencia física al ser golpeado por actores paraestatales y/o agentes policiales; en uno de los casos fue después de una detención de casi cuatro días. Las dos víctimas que indicaron que el proceso de la toma de decisión fue más largo sufrieron una combinación de asedio, amenazas y violencia en varias ocasiones, hasta ‘derramar el vaso’ y buscar seguridad al otro lado de la frontera.

En todos los casos de desplazamiento forzado tanto dentro como hacia fuera del país incide el asedio constante, las amenazas y el desamparo generalizado que sienten las víctimas. Al contrario de poder retomar sus vidas, las víctimas sufren persistentes vulneraciones a sus derechos humanos, civiles y políticos, efectuados tanto por personas afines al partido de gobierno como por las instituciones de Estado que deberían proteger a la ciudadanía.

CONCLUSIONES & DEMANDAS

Expuesto los resultados de nuestra sistematización, consideramos que el Comité debe instar al Estado de Nicaragua a detener de inmediato el acoso y la criminalización de las personas excarceladas y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales, incluido el derecho a la salud y la reparación por los daños causados.

1. El Comité debe instar al Estado a garantizar de inmediato la apertura de las investigaciones judiciales por los casos de tortura, tratamientos crueles e inhumanos y degradantes, con el objeto de enjuiciar

- a los autores materiales e intelectuales de los casos, garantizando que estas investigaciones sean imparciales e independientes y cuenten con la presencia de observadores internacionales.
2. Las investigaciones judiciales deben abrirse para determinar claramente la participación de la Policía Nacional y sus agentes y la participación del Sistema Penitenciario Nacional y sus agentes, así como los actos cometidos en complicidad con actores paraestatales, por los actos realizados a las víctimas aquí incluidas bajo su custodia, la penalización de los actores materiales e intelectuales de ordenar, auspiciar o ejercer la práctica de tortura, incluida la jerarquía de estas dos organizaciones, así como *todos* los agentes que trabajaron en la DAJ de Managua (instalaciones viejas y nuevas del Chipote) entre abril del 2018 y diciembre del 2019.
 3. La investigación judicial y penalización de los jueces responsables de condenar a prisión arbitrariamente a las víctimas en procesos judiciales viciados y por impedir la formulación de denuncias de manera segura en los casos de tortura.
 4. Instar al Estado de Nicaragua a permitir que se realice una visita con carácter urgente a los lugares de detención por parte del Comité Contra la Tortura y por parte del Sub/Comité Contra la Tortura con el objeto de que este puede verificar las graves denuncias existentes en cuanto a las condiciones de detención que pueden constituir en sí mismas diferentes formas de tortura y malos tratos. Igualmente instarlo a permitir rápidamente una visita oficial del Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas.
 5. Instar al Estado de Nicaragua a implementar planes de apoyo psicosocial y de salud para las personas que han sido objeto de tortura para permitirles iniciar el proceso de sanación y mitigación de las consecuencias negativas derivadas de estos actos.
 6. Instar al Estado de Nicaragua al establecimiento de planes dirigidos a la reparación de las víctimas de tortura.

Hacemos también un llamado a la inmediata liberación sin condiciones de todas las 182 personas que siguen detenidas arbitrariamente desde el 2018, para poner un fin a su constante vulneración y malos tratos, así como un cese al asedio y la persecución a todas las personas excarceladas.

Firmamos las víctimas (en orden alfabético):

Rafael Enrique Acevedo Guevara, Heynard Josué Baltodano Escobar, Juan Carlos Baquedano, Juan Bautista Guevara Carballo, Roberto Büchting, Allan Gabriel Castillo Gómez, José Ángel Cuarezma, Marlon José Fonseca Román, Jorge Guadalupe Gómez Moraga, Juan José González López, Jerry Holman Zapata, Ruth Esther Matute Valdivia, Christian Enrique Melendez Melendez, Franklin Javier Morales García, Jorge Huáscar Montenegro López, Ana Gabriela Nicaragua, Victor Manuel Ríos Betancourt, Ulises Josué Rivas Pérez, Yaritzha Rostrán Mairena, María Guadalupe Ruiz Briceño, Yolanda Sánchez Moraga, Onan David Silva, Bryan Steven Urbina Mendoza, Hanssel Manuel Vásquez Ruiz; y 9 víctimas más, quienes por razones de seguridad deben mantenerse anónimas.

Informe presentado por:

Unión de Presas y Presos Políticos
Nicaragüenses (UPPN)



Red Internacional de Derechos
Humanos (RIDH)

